

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Facultad de Derecho

Maestría Derecho Procesal Penal

Trabajo de Grado

Profesor: Ricardo Ariza López

Marzo de 2014

**La institución de los preacuerdos y negociaciones en el código penal militar
frente a la ley 906 de 2004**

Roberto Ramírez García
Luis Miguel Castro Valencia

Resumen.

En este trabajo se hará un análisis de la institución de los preacuerdos y negociaciones en materia penal conforme a la tendencia actual de la implementación de la oralidad en Colombia. Se tendrá como base normativa la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) y la Ley 1407 de 2010 (Código Penal Militar) con el fin de establecer las diferencias y similitudes existentes en el manejo de dicha institución dentro de la justicia penal ordinaria y la justicia penal militar sin dejar de lado la dogmática y la jurisprudencia.

Palabras clave

Oralidad, justicia penal ordinaria, justicia penal militar, preacuerdos y negociaciones

Differences in the institution preliminary agreements and negotiations in the military criminal code before the act 906 of 2004.

Abstract.

This paper makes an analysis of the institution of preliminary agreements and negotiations in criminal matters according to the current trend of the implementation oral proceedings in Colombia. It shall be based legislation to Act 906 of 2004 (Criminal Procedure Code) and Act 1407 of 2010 (Military Criminal

Code) in order to establish the differences and similarities in the use of such institution within the Ordinary Criminal Justice and Military Criminal Justice without forgetting dogma and jurisprudence.

Key Words

Oral proceedings, ordinary criminal justice, military criminal justice, preliminary agreements and negotiations.

Introducción

El dinamismo, como una de las características principales del Derecho, atiende a la necesidad de transformar las leyes, necesidad que depende de la situación particular de un Estado determinado, evaluando las circunstancias históricas para determinar la mejor posición del Derecho en ese segmento de tiempo; pero el dinamismo no puede traducirse en una inestabilidad jurídica a partir de cambios abruptos en las normas jurídicas.

La implementación de la oralidad en el Estado colombiano se encuadra dentro de ese dinamismo del derecho, que obedece en parte a una tendencia internacional a la oralidad, pero, por otro lado, surge en razón a la necesidad de descongestión judicial. Como es conocido, en Colombia la congestión judicial ha sido uno de los principales, si no el principal, freno de la justicia colombiana en todo tipo de procesos, aún después de haberse creado los juzgados de descongestión dicho problema persiste.

El cambio de la legislación colombiana en materia procesal, hacia la oralidad, tuvo su inicio con la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, y se ha implementando en las demás ramas del derecho en forma gradual, como en derecho administrativo – disciplinario, derecho civil y de forma más reciente con la ley 1407 de 2010, Código Penal Militar.

Dicho cambio no es simple, por el contrario, es estructurado y se realiza de forma gradual en cuanto modifica las instituciones del derecho procesal vigente, y por esto tienen un gran impacto en el mundo del derecho.

Es así que, teniendo en cuenta el éxito del Código de Procedimiento Penal en la transformación del derecho procesal hacia un sistema en el que prima la oralidad, éste se convirtió en el ejemplo a seguir para modificar los demás códigos de procedimiento, pero que por la diferencia natural existente entre los procesos, el manejo de las instituciones tiende a variar.

En razón de lo anterior, el presente trabajo tendrá por objeto realizar una comparación de los preacuerdos y negociaciones que se encuentran entre los mecanismos de la justicia penal consensuada como figuras jurídicas consagradas en el sistema procesal penal colombiano (Ley 906 de 2004), e incluidos recientemente en el nuevo Código Penal Militar; así, la comparación de dicha institución se hará entre lo estipulado por la justicia penal ordinaria y la justicia penal militar o castrense.

Para cumplir tal objeto, en el primer capítulo se abordarán los antecedentes de los preacuerdos y negociaciones desde una perspectiva global y local, para determinar cómo fue el manejo de esta institución hasta la expedición del Código de Procedimiento Penal en 2004 que dio inicio a la implementación de la oralidad en Colombia; por otro lado se definirá la institución de los preacuerdos y negociaciones, de esta manera se hará una descripción general de la institución, teniendo en cuenta, por un lado, sus características principales, clases de preacuerdos, naturaleza jurídica y los requisitos para el control judicial; y por último, se abordará el concepto de víctima y de derechos de las víctimas, esto en razón a la importancia de que el preacuerdo o negociación debe respetar tales derechos.

En el segundo capítulo se analizará el manejo de los preacuerdos y negociaciones en Colombia desde la Oralidad. Se dará inicio con una breve introducción sobre los principios y características del sistema oral; paso seguido se abordará el Código de Procedimiento Penal, desarrollando así una exposición de la institución de los preacuerdos y negociaciones desde ésta ley como fundamento principal de la oralidad en Colombia.

Para finalizar el trabajo, en el mismo capítulo se analizará el texto de la Ley 1407 de 2010 en relación a los preacuerdos y negociaciones, estipulado en los artículos 491 a 496, estableciendo así mismo las diferencias y similitudes frente a la Ley 906 de 2004 que se puedan dilucidar; teniendo en cuenta que hasta el momento no hay jurisprudencia al respecto, se tomarán como fuentes la ley y la doctrina. Posteriormente se expresarán las conclusiones respectivas.

1. Generalidades sobre los Preacuerdos y Negociaciones.

1.1. Antecedentes.

Desde una perspectiva global, la institución de los preacuerdos y negociaciones tiene origen en el sistema jurídico norteamericano en la figura de la alegación de culpabilidad y la alegación preacordada que consiste en la aceptación de los cargos formulados por la fiscalía a cambio de una reducción generosa de la pena (Riveros Barragán, 2008). De conformidad con Cornejo (2006) esta figura en el derecho norteamericano se denomina *plea bargaining*, que puede ser definido como un mecanismo penal de negociación que no se aplica para todos los delitos sino solo a los más leves. Al respecto, Espitia Garzón (2011) refiriéndose al principio de oportunidad afirma que:

El reconocimiento del principio puede llevar a la adopción de un mecanismo discrecional como el *plea guilty* o *plea bargaining* anglosajón, que se ha abierto espacio doctrinal y legislativo en Europa y América Latina, que permite a la ley fijar los supuestos y condiciones en que el titular de la acción penal puede hacer uso de él (p. 411).

De esta manera se puede afirmar que los preacuerdos y negociaciones, como una de las formas de terminación anticipada del proceso penal, provienen de esta figura de origen anglosajón, la cual ha permeado el sistema continental teniendo cabida en Europa y América Latina, además tiene como finalidad la reducción de la pena y en contraprestación se genera celeridad y eficacia al proceso penal. Por supuesto, es importante tener en cuenta que esta figura se aplica en el derecho norteamericano a los casos menos gravosos, situación que difiere de la figura de los preacuerdos y negociaciones en cuanto su aplicación es más amplia.

En relación con lo anterior, es bueno aclarar que esta figura tiene diferentes connotaciones dependiendo del país, así pues, como lo afirma Bazzani (2005):

En Italia aparecen como procedimientos especiales al igual que en el Código Tipo para América Latina; en Estados Unidos de Norteamérica se conoce la figura como *plea bargaining* o alegaciones preacordadas de culpabilidad; en España como conformidad; en Portugal como suspensión provisional del proceso, y en Colombia como preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, entre otros (p. 231).

Además de la denominación en estos países, se debe tener en cuenta que en Perú se habla de terminación anticipada, pues esta figura se tiene como referente en el presente trabajo. Aún así, independientemente del nombre que se le ha otorgado por cada país, lo que importa principalmente son las características que tienen en cada país.

Por otro lado, ya en el contexto colombiano, el primer antecedente de los preacuerdos y negociaciones de acuerdo con la Defensoría del Pueblo (s.f.), se encuentra en el año de 1986 con la expedición de la Ley 30, que en el artículo 45 consagra una disminución punitiva a la persona sindicada o procesada siempre que denuncie los autores, cómplices o encubridores del delito investigado; del mismo modo, en el Decreto 1199 de 1987, que en su artículo octavo habla de una reducción de la pena por colaboración con la justicia que concluya con resultados favorables.

En forma diferente se incluye el concepto de eximente de responsabilidad, pues en 1988 la Presidencia de la República por medio de decreto modificó el artículo 37 del Decreto 180 del mismo año, donde ya no se trata evidentemente de una reducción en la pena, sino que exonera de la responsabilidad penal al procesado, condicionando ésta a la colaboración efectiva con la justicia (Decreto 2490 de 1988, Art. 6). Hasta este momento histórico, los preacuerdos y negociaciones no eran aún una institución como tal, de hecho, estas normas forman el cimiento desde el que se empieza a consolidar como institución.

Más adelante, como lo afirma la Defensoría del Pueblo (s.f.), en 1990 la institución va tomando forma mediante su sistematización dentro de la legislación colombiana; esto se logra con los Decretos 2047 de la Presidencia de la República y 3030 del Ministerio de Justicia y del Derecho que establecieron algunos beneficios por colaboración con la justicia en situaciones de perturbación del orden público y Estado de sitio, con el fin de restablecerlo.

En 1991, la Presidencia de la República por medio de decreto crea la figura de terminación anticipada, que consistía en el establecimiento de una audiencia especial, a petición del Fiscal o del sindicado, con beneficio de rebaja en la pena hasta en una sexta parte (Decreto 2700 de 1991, Art. 37), en otras palabras, como afirma Bazzani (2009):

Dicha normatividad daba la posibilidad al fiscal y al sindicado de llegar a un acuerdo acerca de las circunstancias del hecho punible y la pena imponible para ser presentado ante el juez en una audiencia en la que se exigía a este último verificar que fueran correctas y que obrara prueba suficiente (p. 154).

Más adelante éste artículo sería modificado por el Congreso de la República mediante ley, estableciendo la figura de sentencia anticipada (Ley 81 de 1993, Art. 30), que de conformidad con Riveros (2008) se asimila a la figura de alegación de culpabilidad propia del sistema norteamericano.

En el mismo Decreto 2700 se crea la figura de audiencia especial, consagrada en el artículo 37-A mediante el cual el fiscal presentaba los cargos surgidos de la investigación y el sindicado podía aceptarlos en forma total, parcial o rechazarlos. Realizado el acuerdo con la presencia de la defensa y del Ministerio Público se elaboraba un acta que se ponía a disposición del juez para que se ejerciera el control de legalidad, aprobado el acuerdo por el juez, el sindicado obtenía como beneficio una rebaja de una sexta parte de la pena.

ARTÍCULO 37-A. AUDIENCIA ESPECIAL. A partir de la ejecutoria de la resolución que defina la situación jurídica del procesado y hasta antes de que se cierre la investigación, el fiscal, de oficio o a iniciativa del procesado, directamente o por conducto de su apoderado, podrá disponer por una sola vez la celebración de una audiencia especial en la que el fiscal presentará los cargos contra el procesado. La audiencia versará sobre la adecuación típica, el grado de participación, la forma de culpabilidad, las circunstancias del delito, la pena y la condena de ejecución condicional, la preclusión por otros comportamientos sancionados con pena menor, siempre y cuando exista duda probatoria

sobre su existencia (...) (Presidencia de la República, Decreto 2700 de 1991).

Así pues, estas dos figuras tienen diferencia en cuanto a que la sentencia anticipada era una aceptación unilateral de los cargos, en contraposición a la audiencia especial en la que ya existía una dinámica de consenso relacionada con los cargos imputados (Bazzani, 2009).

Como ya se afirmó, en 1993 se crea la figura de sentencia anticipada, que conforme a la ley se iniciaba a petición del procesado, siempre que estuviese ejecutoriada la resolución que definía su situación jurídica hasta el cierre de la investigación; luego de realizado el acuerdo en el cual se presentaba la formulación de cargos por parte del fiscal y la aceptación de éstos por parte del procesado, se elaboraba un acta que era remitida al juez competente para que ejerciera el control de legalidad y dictara sentencia, determinado el monto de la pena se concedía una rebaja de una tercera parte; si el acuerdo se daba después de proferida la resolución de acusación y hasta antes de que se fijara la fecha para la celebración de la audiencia pública, la rebaja concedida era de una sexta parte de la pena.

Por su parte, el Congreso de la República en el año 2000 estableció que el procesado podrá solicitar que se dicte sentencia anticipada después de realizada la diligencia de indagatoria y hasta que quede ejecutoriada la resolución de cierre de la investigación. Podía también dictarse la sentencia anticipada cuando la aceptación de los cargos se realizaba desde que se hubiera proferido la resolución de acusación y hasta antes de quedar ejecutoriada la providencia que fijaba fecha para la celebración de la audiencia pública, en este evento la rebaja era de una octava parte de la pena (Ley 600 de 2000).

1.2. Definición.

El proceso penal culmina normalmente con la imposición de una pena por medio de la sentencia proferida por el juez o con la absolución del acusado; de hecho, está intrínseco en su naturaleza que el proceso esté orientado hacia la primera forma de terminación, pero no es siempre así. Dentro del proceso penal existen otras formas de terminación, que en sí son anormales y se denominan como terminación anticipada (Gómez Pavajeu, 2010), grupo en el cual se encuentran los preacuerdos y negociaciones. Al respecto, la Corte Constitucional (2006) afirma que:

También advierte la Sala Cuarta que en el nuevo estatuto procesal penal, Ley 906 de 2004, se contempla la terminación anticipada del proceso, prevista bajo dos modalidades las cuales permiten la imposición de sentencia condenatoria sin el agotamiento total del debate penal y que ellas se encuentran perfectamente diferenciadas en su estructura, competencia y objetivos político – criminales. Son ellas, (1) el consenso o aceptación de responsabilidad a través de los preacuerdos y negociaciones entre fiscal y procesado y (2) el allanamiento o aceptación unilateral de los cargos (...) (Sentencia T-966 de 2006).

Con lo anterior se sobreentiende que en el ordenamiento penal colombiano existen dos formas de terminación anticipada del proceso, una que es de carácter unilateral y la que interesa al objeto de estudio que es consensuada y se denomina preacuerdos o negociaciones.

En sí, las formas de terminación anticipada del proceso penal han sido objeto de ardua discusión y crítica entre la doctrina, pues a partir de estas surgen problemas en relación a la presunción de inocencia y la prohibición de autoincriminación, además como lo afirma Bazzani (2005):

En efecto, la mayoría de los casos de discusión sobre las formas de terminación del proceso, al adjetivarse con los conceptos anticipada y consensual, producen conflictos entre las máximas rectoras del proceso, legalidad vs. Economía procesal, oportunidad vs obligatoriedad, aún no superados y que llegan al punto de caracterizar diversos sistemas jurídicos que ya desde las aulas de derecho se nos hacen percibir como incompatibles por chocar modelos culturales irreconciliables (p. 215).

Con lo anterior se pone de presente el llamado principio dispositivo o derecho dispositivo de las partes, mediante el cual el proceso penal tiende a asimilarse más a un proceso civil donde intervienen las partes en forma de dialogo que en realidad al concepto estricto de derecho penal en el cual el Estado actúa con todo el peso del *ius puniendi* del que es único titular mediante una aplicación rígida de la ley penal, lo que significa que las partes del proceso no pueden disponer de la pena (Montero Aroca, 1994).

En relación con la presunción de inocencia, el problema se advierte en razón a que las formas anticipadas de terminación del proceso tienden a generar una sentencia con un mínimo de prueba, con esto pueden vulnerarse las garantías no solo del imputado o acusado sino de las partes del proceso en general (Bernal & Montealegre, 2013a).

La problemática que surge en relación con la autoincriminación conforme a Bernal y Montealegre (2013a) tiene fundamento “porque es obvio que la confesión del imputado reemplaza la acción de la Fiscalía en la demostración del delito y, por supuesto, se afecta todo lo referente a la carga de la prueba” (p. 865).

Los preacuerdos y negociaciones en el proceso penal, de conformidad con USAID (2009), hacen parte de las denominadas salidas alternas consensuadas dentro del

proceso penal, o como lo afirman Bernal & Montealegre (2013a), se pueden determinar como parte del “derecho penal premial” (p. 863), de tal forma que la justicia penal otorga ciertos beneficios como la reducción de la pena a imponer, a cambio de la colaboración con la justicia con el fin de que el proceso penal tenga celeridad y eficiencia.

Atendiendo a un estudio semántico, la Real Academia Española (2014) define preacuerdo como un “acuerdo previo entre varias partes que precisa ser ultimado o ratificado” y negociación como aquellos “tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto”. A partir de estos conceptos se puede decir que, de forma general, los preacuerdos y negociaciones son tratos entre varias partes para configurar un acuerdo previo a un suceso el cual debe ser ratificado por la persona idónea para tal fin; aquí se encuentran los elementos fundamentales de los preacuerdos y negociaciones como son: los tratos o diálogos, las partes, el acuerdo, convenio o pacto, que este sea previo y, además, que necesite ser ratificado.

Ahora bien, desde una perspectiva jurídica, en la posición del Tribunal Superior de Bogotá (citado en USAID, 2009), los preacuerdos se definen como “actos que se producen como consecuencia de una negociación informal que se realiza entre el Fiscal y el imputado o acusado y su defensor” (p. 45), teniendo en cuenta que en el proceso penal el imputado o acusado, en razón a su derecho de defensa, debe estar asesorado por un defensor, sea este de confianza o de oficio. De esta manera se evidencian algunos requisitos de los nombrados anteriormente, pues están los diálogos que surgen como la negociación informal, los actos que son los acuerdos generados, las partes que son en este caso el fiscal y el imputado o acusado y su defensor.

Además, como lo afirma Avella (2007), los preacuerdos y negociaciones tienen como objetivo concreto la rebaja de la pena que se pueda derivar del ilícito cometido por el imputado o acusado, garantizando los derechos de las víctimas.

Para que sean válidos estos acuerdos dentro del proceso penal, tienen que ser aprobados por el juez de conocimiento. Se puede evidenciar que será a iniciativa del imputado o acusado, y de su defensor, que se pueda llevar a cabo el preacuerdo o la negociación en función de la rebaja de la pena que se pueda conceder en el caso concreto.

La naturaleza de tal iniciativa y participación activa en el proceso penal por parte del imputado o acusado y su defensor obedece, según lo expresa Durán Ariza (2009), al ejercicio de la democracia participativa en razón a su expansión hacia otros espacios, que en el caso de los preacuerdos y negociaciones tendrá que ver con la injerencia en la toma de decisiones.

Así mismo, se mencionó anteriormente un requisito fundamental: la necesidad de que el acuerdo sea aprobado por el juez de conocimiento, quien es el sujeto idóneo para tal fin en razón a que es el sujeto que va a dictar la sentencia, de esta manera queda claro que el juez de control de garantías no puede ejercer vigilancia sobre el preacuerdo o negociación.

De conformidad con Bernal & Montealegre (2013a), el control de legalidad que realiza el juez de conocimiento a los preacuerdos y negociaciones tiene cuatro postulados: 1) “sobre la actuación de negociación” en relación al debido proceso; 2) “sobre el sustento probatorio de las conductas imputadas en la negociación” en cuanto a supere el mínimo que exige la ley; 3) “sobre la calificación jurídica de la imputación primigenia” en relación con la correspondencia entre los hechos y la adecuación típica; y 4) respeto al “principio acusatorio” en relación con que la aprobación o el rechazo del escrito del preacuerdo debe ser únicamente en la audiencia de control (p. 898 – 899).

Así mismo, Bazzani (2009) en relación al control judicial sobre los preacuerdos y negociaciones afirma que:

Lo anterior implica que en el acto de aprobación de un acuerdo o de un allanamiento a los cargos el juez debe examinar que el procesado haya admitido la responsabilidad en relación con hechos que la Fiscalía efectivamente consideró probados al momento de formular la imputación y que, en consecuencia, de encontrar alguna contraevidencia entre dichas pruebas no controvertidas y la confesión del imputado, debe rechazar el acuerdo (p. 157).

Con base en lo anterior, en relación al control judicial de los preacuerdos y negociaciones, se puede decir que el juez de conocimiento en audiencia debe realizar el control sobre el preacuerdo o negociación al que haya llegado la Fiscalía y el imputado o acusado y su defensor en relación a los hechos, las pruebas, teniendo en cuenta los derechos y garantías de las partes en el proceso penal, donde no se debe olvidar, también caben las víctimas.

De otro lado afirman Garzón, Londoño & Martínez (2007), que las partes en la negociación tienen cada una de ellas ciertos objetivos, por un lado, la Fiscalía General de la Nación busca que el imputado o acusado acepte los cargos que le son imputados o relacionados en el escrito de acusación con el fin de obviar algunas etapas del proceso, dando aplicación al principio de celeridad y economía procesal, logrando así los fines de la justicia; por otro lado, el imputado o acusado, representado por su defensor, busca que la Fiscalía elimine circunstancias que acentúen el monto de la pena, dentro de estas circunstancias pueden enumerarse la supresión de agravantes y el reconocimiento de atenuantes; supresión del concurso delictivo; cambio de denominación jurídica, variar el grado de participación, forma de culpabilidad; todo ello en pro de conseguir una rebaja de la pena a imponer como sanción por la realización de la conducta delictiva.

Con esto, institución de los preacuerdos y negociaciones se puede asimilar en la figura peruana de terminación anticipada, pues conforme a Sánchez Velarde

(Citado por Alegría, Conco, Gutiérrez, Herrera, Menzala, Ponce y Villanueva, 2012):

La terminación anticipada se basa en el llamado derecho penal de transacción que busca, mediante una fórmula de consenso o acuerdo, evitar un periodo de la instrucción y juzgamiento innecesarios, sentenciándose anticipadamente. El procesado por su parte obtiene una reducción en la pena. El acuerdo se realiza entre el fiscal y el imputado y requiere de la aprobación del juez penal (p. 105).

Atendiendo a lo anterior, Alegría *et al* (2012) expresan también que pueden darse reuniones de carácter informal entre el fiscal y el imputado o acusado con el fin de llegar a un acuerdo. En este sentido se puede entender que al igual que en el ordenamiento colombiano, en el derecho penal peruano se habla de negociaciones que tienen como finalidad un beneficio en la disminución de la pena, se realizan entre la fiscalía y el imputado o acusado, busca celeridad en el proceso y dicho acuerdo requiere aprobación por parte del juez penal.

Ahora bien, dentro de las características generales de los preacuerdos y negociaciones, que se derivan de la definición dada, la Defensoría del Pueblo (s.f.) considera las siguientes: se realizan entre el imputado o acusado y la Fiscalía, el imputado o acusado debe estar asesorado por su defensor, en su contenido están limitados por la ley, y se vuelven vinculantes desde la aprobación del juez de conocimiento.

En este punto es importante resaltar, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia en su momento, que el preacuerdo al que llegan el fiscal y el imputado o acusado y su defensor debe respetar tanto el principio de legalidad como los derechos y garantías de los intervinientes, si no es así el juez de conocimiento no debe aprobarlo y mucho menos ratificarlo al momento de dictar sentencia (Tello Sánchez, 2008).

Así mismo, conforme a Durán Ariza (2009) el preacuerdo realizado entre la Fiscalía y el imputado o acusado y su defensor tiene un efecto vinculante para el Juez de conocimiento en cuanto se respete la Constitución y la ley, se haya respetado el debido proceso y se evidencie que no se vulneran las garantías fundamentales de las partes.

Ahora bien, de conformidad con la Corte Constitucional (2010), los preacuerdos deben contener el reconocimiento de la responsabilidad por parte del imputado o acusado, un fundamento fáctico y probatorio que sustente el acuerdo, la renuncia del imputado o acusado al juicio público y los descuentos punitivos derivados del acuerdo (Sentencia C- 059 de 2010). Esto pone en claro que si bien la negociación es informal, el acuerdo sí es formal, demás que si no fuera así no tendría sentido; por otro lado se deja presente que el acuerdo contiene obligaciones recíprocas entre la Fiscalía y el imputado o acusado.

En razón de lo anterior, dentro de las clases de preacuerdos, que tienen como eje el contenido, se pueden encontrar los que afectan la existencia de cargos, los que afectan el contenido del cargo, los que se basan en la cooperación con la justicia y los preacuerdos cruzados (Defensoría del Pueblo, s.f.). En cuanto a los primeros, se dirige a lograr que el Fiscal modifique los cargos a presentar por unos menos graves o suprima algunos; los segundos, no tienden a modificar el cargo sino el contenido como tal, por ejemplo una modificación de las circunstancias de agravación o atenuación; sobre los terceros, se trata de una reducción en la pena por cooperación a la justicia sin modificar en algún sentido los cargos; y los últimos, surgen por alguna combinación que pueda efectuarse entre las anteriores.

Por otro lado, de acuerdo con Avella (2007), los acuerdos y negociaciones tienen ciertas finalidades que hacen de ésta una institución válida y eficaz en el derecho penal; tales finalidades son la de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que

genera el delito, propiciar por una reparación integral y lograr la participación del imputado o acusado en la definición de su caso.

En cuanto a la naturaleza de la institución de los preacuerdos y negociaciones, la Defensoría del Pueblo (s.f.) afirma que, sobre todo en la denominación de preacuerdos, se encuentra que hace referencia al momento en que se realiza, es decir, en forma previa al juicio oral; por tal razón, el que tenga que ser aceptado por el juez de conocimiento, para darle fuerza vinculante, no implica que esté errado el legislador al otorgarle la calificación de preacuerdo en vez de acuerdo (USAID, 2007). Así mismo, ambas figuras se distinguen del allanamiento en que este es unilateral, mientras que los preacuerdos son de carácter bilateral (Defensoría del Pueblo, s.f.).

1.3. Concepto de víctima y derechos de las víctimas.

Una de las partes del proceso penal, quizás la más olvidada por el legislador es la víctima. Olvidada en el sentido que la norma procesal penal ha dejado ciertos vacíos con respecto a la dinámica de su actuación en el transcurso del proceso, vacíos que sin duda alguna han sido complementados por las decisiones de la Corte Constitucional, que en palabras de Matyas Camargo (2012) “se ha desarrollado una consistente línea jurisprudencial en protección de la participación en el proceso penal y los derechos de las víctimas” (p. 19). Por tal razón es importante para el presente estudio abordar el tema de la víctima, un poco de forma general en esta parte, haciendo referencia al concepto y derechos.

Cabe señalar que la víctima en relación a sus derechos fundamentales tiene más atención en los procesos de justicia transicional, como por ejemplo la famosa ley de justicia y paz que impulsó el gobierno de Álvaro Uribe. Esto se debe en gran medida a que en los procesos de justicia transicional hay órganos internacionales expectativos y vigilantes, que pueden ser tanto países como órganos

supranacionales (como el caso de la ONU) y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

Un concepto restringido de víctima se podía encontrar en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), que en su artículo 132 establecía que víctima era aquella persona, natural o jurídica, que ha sufrido un daño directo como consecuencia de un delito. Más adelante, en el año 2007, la Corte Constitucional declaró inexecutable la palabra “directo”, pues se considera que no es necesario el sufrimiento de un daño directo para ser considerado víctima en un proceso penal.

De conformidad con Bernal & Montealegre (2013b), a partir de las decisiones de la Corte Constitucional es posible inferir un concepto amplio de víctima definidos de la siguiente manera:

De los referentes normativos y los precedentes jurisprudenciales reseñados se extraen varios elementos que guiarán el análisis de constitucionalidad de los preceptos que regulan el alcance del concepto de víctima:

(i) Conforme al texto constitucional, en desarrollo del principio de dignidad, del derecho de participación y del derecho a un recurso judicial efectivo, tienen acceso a la asistencia, al restablecimiento del derecho y a la reparación integral tanto las víctimas como los afectados del delito (art. 250.2 C.P.); (ii) la tendencia en el derecho internacional es la de definir la condición de víctima a partir del daño sufrido como consecuencia del crimen; (iii) esta corporación tiene una jurisprudencia consolidada que se constituye en precedente, conforme a la cual son titulares de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación las víctimas y los perjudicados que acrediten un daño real, concreto y específico como consecuencia de la conducta criminal (p. 214 – 215).

De lo anterior se desprende que al señalarse un concepto amplio de víctima, también se tienen en cuenta otro grupo de personas en cuanto acrediten la calidad de perjudicados en razón a un daño real, concreto y específico. Además, se señala que el concepto de víctima surge a partir del daño sufrido como consecuencia de un delito, pero como se dijo con anterioridad, tal daño no debe ser estrictamente directo. Finalmente, se tiene que los derechos fundamentales de las víctimas son la verdad la justicia y la reparación integral.

Respecto de los derechos de las víctimas, Márquez Cárdenas (2009) se ha referido respecto de los tres derechos anteriormente nombrados, así pues, afirma que el derecho a la verdad se predica por el conocimiento real de los hechos buscando la coincidencia entre verdad real y procesal; el derecho a la justicia está supeditado a que no haya impunidad; y el derecho a la reparación del daño sufrido mediante una compensación de carácter económico. En este punto se debe aclarar que la compensación económica no es la única manera de resarcir el daño, pues la doctrina y la jurisprudencia se han referido a otros medios como el restablecimiento de la situación anterior a la violación en cuanto sea posible, y por otro lado se encuentra la justicia restaurativa mediante el perdón y la realización de actos simbólicos como figuras que se tienen en cuenta en la justicia transicional, esto siempre que la víctima acepte dichas forma de resarcimiento.

Existen otros derechos de las víctimas que si bien no son fundamentales, son realmente importantes por ser derechos procesales, entre estos se encuentra el derecho a ser protegidas, como lo afirma Matyas Camargo (2012) “tanto a ellas como a sus familias” (p. 27). Este derecho es realmente importante en relación con el desarrollo del proceso penal en la búsqueda de la verdad real, pues la víctima o su familia pueden ser objeto de varias acciones delictivas como amenazas, atentados, entre otros.

Estos derechos procesales surgen en razón al derecho fundamental de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y en palabras de Bernal & Montealegre

(2013b) “implica necesariamente que la víctima y el perjudicado tengan la posibilidad de participar en el proceso penal” (p. 715). En otras palabras, “la víctima cumple un rol protagónico en el proceso penal acusatorio, independientemente si se llama parte o interviniente” (Avella Franco, 2007, p. 73).

De igual forma, las víctimas tienen derecho a intervenir en todas las etapas del proceso penal, derecho a ser asistidas o representadas, derecho a formular la querrela en los delitos querellables valga la redundancia, y el derecho a iniciar el incidente de reparación integral, entre otros. Al respecto Matyas Camargo (2012) afirma también que:

La víctima, a su vez tiene derecho a acceder a la administración de justicia, conocer la verdad y a la reparación integral, así como la de obtener medidas judiciales de protección, sin perjuicio de poder acudir ante la jurisdicción civil ordinaria para efectos de obtener la reparación del daño ocasionado con el delito (p. 33).

De lo anterior se deduce que el acceso a la justicia por parte de la víctima del delito parte de su derecho fundamental a la verdad, justicia y reparación integral, esto debe ser así en razón a que la víctima es quien sufre el daño por el acaecimiento del delito, pues el derecho penal no solo tiene un fin sancionatorio, sino que también tiene una finalidad compensatoria en relación con el sujeto pasivo y las víctimas del delito.

En relación con este aparte, la Corte Constitucional entre sus pronunciamientos más recientes se ha referido a varios puntos importantes que resumen y complementan el objeto de estudio:

La Constitución (art. 29 y 229) y las normas internacionales que se integran a ella a través del bloque de constitucionalidad (arts. 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos), reconocen a las

víctimas el derecho a un recurso judicial efectivo como instrumento imprescindible para hacer efectivos los derechos mencionados, derechos a la verdad, justicia y reparación integral (Sentencia C-260 de 2011).

Resalta la Corte Constitucional la importancia del bloque de constitucionalidad en relación a que los tratados internacionales complementan el derecho interno en pro de los derechos y garantías de las víctimas, así pues, por medio del bloque se establece el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo con la finalidad última de garantizar su derecho fundamental a la verdad, justicia y reparación. De otro lado, la Corte afirma que:

La jurisprudencia de esta corporación ha precisado que si bien la Constitución no define el concepto de víctima, el mismo hace parte de la Carta Política, en la medida en que el numeral 6° del artículo 250 establece entre las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación, la de solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas y disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito (Sentencia C-651 de 2011).

En este aparte, la Corte deja de presente que poco importa que la víctima no esté definida por el constituyente en la Carta Política, pues no hace falta definirla para que haga parte de la normativa constitucional y por ende se pueda predicar dicha protección constitucional hacia las víctimas del delito; así pues, en la constitución le impone el deber de velar por los derechos de las víctimas a la Fiscalía General de la Nación, pues por su condición la víctima tiene un trato especial.

2. La institución de los preacuerdos y negociaciones desde la oralidad en Colombia.

2.1. Principios rectores del sistema oral dentro del procedimiento penal en Colombia.

El establecimiento de la oralidad en el sistema penal colombiano está dirigido a la implementación del sistema penal acusatorio que, como se dijo anteriormente, proviene de una tendencia internacional generalizada además de la intención de generar un resultado favorable al problema de congestión judicial, entendida por el Consejo Superior de la Judicatura (2004) como el “volumen de demanda de justicia superior a la capacidad razonable de respuesta de la Rama Judicial” (p. 6); entonces, por medio de este concepto se puede decir que al agilizar el procedimiento aumentará la capacidad razonable de respuesta y por ende disminuirá el volumen excesivo de demanda de justicia generando una situación proporcionalmente equitativa.

Pero esta transición tiene también fundamento en que el sistema anterior, hablando del sistema inquisitivo, “no contribuía a proteger las garantías jurídicas básicas (el “due process”), ni a promover la transparencia la cual, como hoy se sabe, es tan esencial a la administración de justicia como la justicia misma” (Gilles Bélanger, 2010, p. 64). Teniendo en cuenta que el cambio hacia un sistema acusatorio ha sido una tendencia general en América Latina, no solo se debe generar en la justicia ordinaria, pues es menester que también se aplique en la justicia castrense en razón a proteger dichas garantías básicas y promover la transparencia en el desarrollo del proceso penal.

Si bien, la oralidad es el principio fundamental dentro del sistema penal acusatorio, además de ser un “aspecto característico de todos los modelos con tendencia acusatoria” (Riveros Barragán, 2008, p. 182), se relaciona con otros principios que

lo complementan, sin ser menos importantes, como lo son la publicidad, la contradicción, la inmediación, la concentración, la celeridad y la eficacia (USAID, 2003). Dichos principios fueron acogidos por el Congreso de la República dentro del Código de Procedimiento Penal en el título preliminar (Ley 906 de 2004).

Como se afirma en USAID (2003) La relación del principio de oralidad con el principio de publicidad se establece básicamente en el juicio oral, juicio que por regla general está abierto al público para su observación, realizando de esta forma un control ciudadano a la administración de justicia, garantizando así su transparencia.

De igual manera, en la relación con el principio de contradicción, se debe tener en cuenta, de conformidad con USAID (2003), que “la realización plena del contradictorio se produce cuando el sistema permite la interacción de las partes en forma equilibrada” (p. 91), es decir, en el juicio oral. Así mismo, desde USAID se afirma que la inmediación tiene relación con el principio de oralidad en el sentido que es el juez quien tiene la posibilidad de aplicar las reglas de valoración y crítica de la prueba, dentro del juicio oral, en pro de la aproximación a la verdad de los hechos. En el mismo sentido se aplica el principio de concentración, toda vez que la práctica de las pruebas se realiza en el juicio oral, en presencia del juez como máxima autoridad.

Entre los principios rectores que gobiernan el proceso penal no se puede escapar el principio acusatorio, el cual hace referencia a que las funciones de acusar, defender y juzgar dentro del proceso penal deben estar en cabeza de órganos diferentes, y del mismo modo, que la función de juzgar esté regida por el principio de imparcialidad, lo cual indica que el juez no puede estar contaminado de prejuicios a favor o en contra del acusado a la hora de fallar (Montero Aroca, 1994).

En general, la aplicación de los principios anteriormente nombrados, algunos no solo en el juicio oral, pero todos en su conjunto hacen que el proceso penal, es decir, la justicia, adquiera celeridad y eficacia (USAID, 2003). Se puede ver entonces que, como regla general, la aplicación de los principios en el proceso acusatorio se dirigen siempre al juicio oral, situación que no implica que no se puedan aplicar en los demás momentos procesales; de tal manera que en los preacuerdos y negociaciones se aplican los principios, como en el juicio oral, pero en un momento diferente.

Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en lo que se refiere a los principios procesales aplicados en los preacuerdos y negociaciones afirma que:

Dicho en otras palabras, el novedoso sistema está diseñado para que a través de las negociaciones y acuerdos se finiquiten los procesos penales, siendo esta alternativa la que en mayor porcentaje resolverá los conflictos, obviamente sin desconocer los derechos de las víctimas y de los terceros afectados con la comisión de la conducta punible, partes que en este esquema recobran un mayor protagonismo dentro del marco de justicia restaurativa (Sentencia de 23 de agosto de 2005, Sala de Casación Penal)

En este sentido se puede afirmar que uno de los fines de la figura de los preacuerdos y negociaciones es la búsqueda de la descongestión judicial con el atractivo de los beneficios para quienes cometen ilícitos y la terminación expedita de los procesos penales.

2.2. Los preacuerdos y negociaciones en la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).

En principio, de conformidad con Sintura (2004) el anteproyecto que contempló los preacuerdos y negociaciones tiene su origen en la Regla 72 del Procedimiento Penal de Puerto Rico. Éste preveía un sistema en el que los acuerdos sólo se podían producir una vez se hubiera formulado la acusación y hasta antes de la iniciación del juicio oral. El sistema se basaba en la preexistencia de una acusación que, además de revelar los hechos, también revelaba la prueba, y se partía del hecho de cómo el Fiscal descubría la prueba en la audiencia de acusación y el acusado, informado de los alcances de su decisión, alegaba su culpabilidad en forma libre y espontánea. Por lo tanto los acuerdos sólo se llevaban al juez en la audiencia acusación, hasta antes de la exposición de la teoría del caso por la Fiscalía.

Ahora bien, el artículo 348 de la Ley 906 establece como finalidades de la celebración de preacuerdos y negociaciones, la humanización de la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso (Gómez Pavajeau, 2010).

En este punto, la Corte Suprema de Justicia atendiendo a las finalidades, aparte de enumerar las que están consignadas en la ley, expresa que:

En particular ésta última, originada en el principio democrático de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan contenido en el artículo 2º de la Constitución Política, se vincula con la idea de una justicia en la que sin desconocerse los derechos de la víctima y el interés de la Fiscalía por lograr cierta respuesta sancionatoria en un caso concreto, el procesado siempre cuenta con la

opción de anticipar la sentencia a cambio de una rebaja en la pena, así la Fiscalía se niegue a conversar con él para negociar sobre hechos a imputar y consecuencias (Sentencia de 14 de diciembre de 2005, Sala de Casación Penal).

De esta manera, la Corte, con base a la Constitución Política, asegura que es llamativo para quienes cometen delitos el lograr un preacuerdo con la Fiscalía, teniendo en cuenta que le da la opción de obtener una rebaja considerable en la pena que se le pueda imponer siendo procesado; y por otro lado, deja en claro que con los preacuerdos y negociaciones es obligatorio que los derechos de las víctimas no se vulneren.

Frente a los derechos de las víctimas, es entendido conforme al artículo 340 del Código de Procedimiento Penal que la determinación de la calidad de víctima en el proceso penal se realiza en la audiencia de formulación de acusación (Ley 906 de 2004), pero como bien lo afirma la Corte Constitucional, la participación de la víctima no inicia en dicha audiencia, pues conforme al artículo 137 de la Ley 906 de 2004 la víctima tiene derecho a participar en cualquier momento de la actuación penal (Sentencia C- 516 de 2007).

De esta manera, en la misma sentencia la Corte analizó la situación de la víctima específicamente dentro de los preacuerdos y negociaciones, teniendo en cuenta que el demandante estimaba que se excluía la participación de la víctima conforme a los artículos 348 y 350 donde solo nombran a la Fiscalía y el imputado o acusado como partes intervinientes en los preacuerdos y negociaciones; sobre esta estimación, la Corte afirmó que:

Así mismo, advierte la Corte la imposibilidad de analizar el cargo formulado relativo a la exclusión de la víctima de los preacuerdos y negociaciones, sin extender el análisis a los artículos 351 y 352 que desarrollan las reglas de intervención de actores procesales

establecidas en los artículos 348 y 350 demandados (Sentencia C- 516 de 2007).

Es así que el artículo 351 habla de la reparación efectiva de las víctimas en cuanto puede o no ser aceptada por la víctima en el caso concreto; en el primer caso no hay problema alguno, mientras que en el segundo, cuando no es aceptada, la víctima “podrá acudir a las vías judiciales pertinentes” (Ley 906 de 2004), que conforme a la Corte Constitucional (2007), en principio como es deber informar a la víctima sobre un preacuerdo celebrado, esta puede acudir al juez de conocimiento con el fin de que se le respeten sus derechos y garantías; si aún la víctima no está conforme con la decisión puede impugnar la sentencia de manera anticipada conforme a los artículos 20 y 176, y promover posteriormente el incidente de reparación integral teniendo en cuenta el artículo 102 (Sentencia C- 516 de 2007).

Finalmente, sobre la situación de las víctimas en el marco de los preacuerdos y negociaciones la Corte concluyó que:

Por las razones expuestas, la Corte declarará la exequibilidad condicionada, por los cargos analizados, de los artículos 348, 350, 351 y 352 en el entendido que la víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal, y oída por el juez encargado de aprobar el acuerdo, quien para su aprobación velará por que el mismo no desconozca o quebrante garantías tanto del imputado o acusado, como de las víctimas (Sentencia C- 516 de 2007).

Por otro lado, conforme a lo estipulado en la ley por el Congreso de la República, es improcedente el preacuerdo o negociación en el caso que hubiese un incremento patrimonial en pro del sujeto activo por la realización de la conducta

punible, pero trae una excepción en cuanto que sí se puede llevar a cabo el preacuerdo si dicho sujeto ha reintegrado por lo menos el cincuenta por ciento del incremento patrimonial (Ley 906 de 2004, Art. 349), razón que, de acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura & Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (2009), es válida para tutelar debidamente la reparación de la víctima del hecho punible.

Otras causales de improcedencia de los preacuerdos y negociaciones son: cuando se desconocen derechos y garantías fundamentales tanto del imputado o acusado como de las víctimas, situación en la cual el juez no debe aprobar el acuerdo; conforme al Código de la Infancia y Adolescencia son improcedentes los preacuerdos y negociaciones “Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes” (Ley 1098 de 2006, Art. 199, núm. 7). Finalmente, sobre este punto se debe dejar claro que, conforme se expresa en USAID (2009), “La Fiscalía General puede seleccionar eventualmente algunas figuras típicas que, por sus implicaciones sobre la sociedad, pueden ser excluidas de la posibilidad de la negociación (delitos de lesa humanidad)” (p. 132).

El momento procesal en el que se puede acudir a esta institución, conforme a la ley expedida por el Congreso de la República, se da desde la audiencia de formulación de imputación hasta antes que se presente el escrito de acusación (Ley 906 de 2004, Art. 350). Pero la misma ley también da a conocer que se pueden realizar preacuerdos entre la presentación de la acusación y el interrogatorio del acusado al principio del juicio oral (Ley 906 de 2004, Art. 352), lo cual tiene consecuencias para el procesado en cuanto le otorga una reducción menor en la pena que si hubiese realizado el preacuerdo con antelación. Lo anterior pone en claro el límite dentro del proceso para que, tanto la fiscalía como el procesado, se beneficien de los preacuerdos y negociaciones. Además, en cuanto a la capacidad de negociación en cabeza del fiscal que se describe en el artículo 350, Espitia Garzón (2011) afirma que:

En relación con este último aspecto estableció la Corte Constitucional que no significa que el fiscal pueda crear tipos penales sino que se le otorga cierto grado de apreciación en cuanto a la imputación, lo que no le exime de seleccionar adecuadamente el tipo, toda vez que debe obrar de acuerdo a los hechos del proceso (p. 407).

De lo anterior se deduce entonces que el fiscal no tiene libertad absoluta para negociar los preacuerdos, más bien debe atender ciertos parámetros entre los que se encuentran principalmente los hechos. De igual forma, a sabiendas del control judicial posterior, el fiscal deberá atender a los puntos que son objeto de dicho control con el fin de evitar el rechazo del preacuerdo por parte del juez de conocimiento. Respecto de la facultad del fiscal en la celebración de los preacuerdos la Corte Constitucional (2005) ha dicho que:

En efecto, en relación con la posibilidad de celebrar acuerdos entre el fiscal y el imputado, aquél no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. Por lo que, aún mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según los hechos que correspondan a la descripción que previamente ha realizado el legislador en el Código Penal (Sentencia C-1260 de 2005).

Existen varias modalidades de preacuerdos y negociaciones, conforme lo estipula en la ley el Congreso de la República (Ley 906 de 2004, Art. 351); tales modalidades están dirigidas al objeto del preacuerdo. Es así que los preacuerdos, como se dijo en la parte general, se pueden realizar sobre los cargos, sobre los hechos, sobre el proyecto de cargos cuando la Fiscalía pretenda incluir otros cargos derivados de nuevos elementos, y los preacuerdos mixtos.

A los preacuerdos y negociaciones, como en toda actuación judicial, se debe realizar un control de legalidad. Al respecto, el control de legalidad actúa como un límite de los preacuerdos y negociaciones y se desarrolla en principio por la misma Fiscalía, en el actuar propio de sus funciones, y por el juez de conocimiento, cuando revisa el acuerdo para decidir si lo acepta o no.

El control que debe ejercer el fiscal se encuentra estipulado por el Congreso de la República en la misma ley de la siguiente manera: “El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento” (Ley 906 de 2004, Art. 348, Inc. 2). En este sentido, la Fiscalía General de la Nación expidió la Directiva N° 001 de septiembre de 2006, mediante la cual se fijan nueve directrices para la celebración de preacuerdos y negociaciones que contienen las finalidades, factores relevantes, objeto, límites a las negociaciones, garantía de los derechos de las víctimas, define la iniciativa para adelantarlos, una regla general de aplicación, reintegración patrimonial derivada del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal y finalmente un deber de información en cabeza del fiscal sobre los alcances de los preacuerdos.

En cuanto al control que debe ser ejercido por el juez, como lo afirma la Defensoría del Pueblo (s.f.), se puede dividir en legalidad extrínseca y legalidad intrínseca. Dentro de la primera le corresponde constatar que el acuerdo esté libre de vicios en el consentimiento, tanto del Fiscal como del procesado; de la misma manera, que en la creación del acuerdo el procesado haya estado acompañado por su defensor y por último constatar que el procesado entiende lo que está dentro del acuerdo además de los efectos que produce. Dentro de la legalidad intrínseca el juez mirará el contenido del acuerdo verificando que se ajuste a derecho y que no se comprometa la presunción de inocencia. Así pues, en otras palabras, como lo afirma Espitia Garzón (2011):

En consecuencia, el juez puede rechazar los preacuerdos si los elementos probatorios y evidencia física recaudada, así como las eventuales pruebas anticipadas aunadas, le permiten concluir que existe: error frente al *nomen iuris* de la infracción, una causal de preclusión o el grado de participación es diferente al acordado (p. 409).

Además de lo dicho anteriormente, desde una perspectiva jurisprudencial, la Corte Constitucional ha expresado que:

El Juez de control de garantías o de conocimiento, interrogarán al imputado o acusado para verificar que el preacuerdo obedece a una decisión voluntaria, libre, espontánea, informada y asesorada; los preacuerdos no pueden comprometer la presunción de inocencia, y proceden ante la existencia de un mínimo probatorio sobre autoría o participación (Sentencia C- 1195 de 2005).

En este pronunciamiento de la Corte se ratifica lo dicho anteriormente, excepto por que la corporación incluyó al juez de garantías dentro de la revisión de legalidad de los preacuerdos, teniendo en cuenta que la aprobación del preacuerdo está en cabeza de un juez de conocimiento como se deduce de los artículos 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal.

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia también se expresa sobre el tema en varias ocasiones, al respecto afirma que:

Ese control judicial del allanamiento o del acuerdo no se cumple con una simple revisión formal. No basta con constatar la libertad y voluntad a través del simple interrogatorio al procesado, la labor del juez como garante y protector de los derechos humanos debe ir más allá verificando que las garantías fundamentales se hayan preservado,

dentro de las cuales, obviamente, se encuentran, entre otras, la legalidad, estricta tipicidad y el debido proceso (Sentencia de 08 de julio de 2009, Sala de Casación Penal)

De hecho, La Corte Suprema de Justicia, confirma al igual que la Corte Constitucional los preceptos señalados para un efectivo control de legalidad señalados previamente por la doctrina en el presente trabajo.

2.3. Los preacuerdos y negociaciones en la Ley 1407 de 2010 (Código Penal Militar).

La justicia penal militar, antes de la expedición del nuevo Código Penal Militar, se regía por la Ley 522 de 1999, norma que ajustaba la especialidad de esta justicia y la diferenció de la ordinaria. Existiendo entonces la jurisdicción especial para el juzgamiento en materia penal de los miembros de las Fuerzas Militares, otorgándoles así un fuero especial, de rango constitucional teniendo en cuenta que así lo dispuso la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución del 91 (Constitución Política de Colombia, Art. 221). Al respecto, la Corte constitucional se pronunció de la siguiente manera:

En Colombia la estructuración constitucional de la Justicia Penal Militar responde a un modelo intermedio que se soporta sobre el reconocimiento constitucional de la institución del llamado fuero militar (art. 221 C.P.), justicia que está integrada por elementos orgánicos y funcionales, objetivos y subjetivos, cuya manifestación concreta se encuentra en la existencia de un órgano jurisdiccional independiente e imparcial -Cortes Marciales o Tribunales Militares- encargado de juzgar los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo -fuerzas militares y policía nacional- en relación con el mismo

servicio, y con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar (Sentencia C- 141 de 1995)

Lo anterior es una justificación a la necesidad de una normatividad especial para el juzgamiento de los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, cuando estos son cometidos en ejercicio de sus funciones. Sumado a esto, como se dijo anteriormente, por la tendencia hacia la oralidad de los procedimientos judiciales en Colombia, teniendo en cuenta el dinamismo del Derecho, se hizo necesario una modificación en la legislación penal militar, creándose de esta manera el nuevo Código Penal Militar.

El sustento constitucional de la jurisdicción especial de la Justicia Penal Militar se encuentra en el artículo 221, que se puede considerar como un marco general para el desarrollo posterior de un Código Penal y de Procedimiento Penal Militar. En este mismo artículo, de forma expresa se señala que la Justicia Penal Militar nunca podrá conocer sobre “los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado” (Constitución Política de Colombia, Art. 221).

Conforme al mismo artículo, también existen dos requisitos o elementos del fuero especial para que un caso sea conocido por la Justicia Penal Militar: por un lado, el elemento personal, que indica que el militar o policía esté en servicio activo; y por otro, el elemento funcional, que indica que el hecho cometido tenga relación con el servicio, es decir que si la conducta no es directa y próxima con la función militar o policiva el caso será conocido por la jurisdicción ordinaria.

De acuerdo a Camelo Piñeros (2005), el marco constitucional de la justicia penal militar no se limita al artículo 221 superior, sino que también corresponde el artículo 216, artículo que dice: “la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). Esto supone que por el carácter exclusivo de las Fuerzas

Militares y en razón al poder que les faculta, es necesario que se les juzgue de forma distinta, pues no se les puede juzgar como a cualquier civil.

Ahora bien, en este aparte se pretende analizar el contenido de cada uno de los artículos que dentro de la Ley 1407 de 2010 hacen referencia a los Preacuerdos y Negociaciones, con el fin de realizar la comparación con el contenido de los mismos que se encuentran en la ley 906 de 2004, teniendo en cuenta que el nuevo Código Penal Militar se encuadra en el marco de la oralidad.

Ya se preveía con antelación a la expedición del nuevo Código Penal Militar la necesidad de un cambio, atendiendo a los ya presentados en la justicia ordinaria, en este sentido Puentes Torres (2006) dijo que:

La promulgación de una ley procesal que revitalice en lo inmediato el actual Código, y de otra que vertebre a partir de la oralidad el sistema acusatorio, es aporte que ayudará de manera importante a la modernización de la administración de justicia (p. 7).

Las finalidades planteadas en el Código Penal Militar son las mismas establecidas en la Ley 906 de 2004 por el Congreso de la República, que en términos generales son: humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso (Ley 1407 de 2010). Esta similitud entre las disposiciones de los ordenamientos ordinario y castrense obedece que el primero avanza más rápidamente que el segundo y por esto mismo la justicia penal militar busca asimilarse a la ordinaria mientras se atiende a los requerimientos legales, constitucionales y convencionales.

Cabe resaltar que no se contempló en el artículo 491 la observación que el Fiscal debe hacer de las directivas y pautas establecidas por la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que, si bien ambas son instituciones acusadoras, se

está al frente de una jurisdicción especial y por ende de instituciones diferentes de la justicia ordinaria. En este sentido, el Fiscal Penal Militar deberá verificar que no se vulneren garantías y derechos fundamentales del acusado y de las víctimas; de igual forma sería aplicable la improcedencia de los preacuerdos y negociaciones prevista en el Código de la Infancia y la Adolescencia para la ley 906 de 2004 en virtud del fundamento constitucional y legal existente.

Por otro lado, no se incluyó el nuevo Código Penal Militar el contenido del artículo 349 de la Ley 906 de 2004, que se refiere a la improcedencia de acuerdos y negociaciones cuando, con la comisión del delito, el sujeto activo de la conducta hubiere incrementado su patrimonio, hasta tanto no se reintegre por lo menos el cincuenta por ciento del valor incrementado. No se explica la no inclusión de esta causal de improcedencia, pues aunque la mayoría de los delitos que pueden cometer los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, no conllevan a un incremento patrimonial, si existen conductas punibles contempladas en la nueva ley que pueden dar como resultado un incremento patrimonial como por ejemplo la venta y el tráfico ilegal de armas contemplado en el artículo 133, el comercio con el enemigo contemplado en el artículo 120, el saqueo contemplado en el artículo 156, los delitos de peculado contemplados en los artículos 161 a 163, el hurto de armas y bienes de defensa contemplado en el artículo 168 y los que conforme al artículo 171 delitos contemplados en la jurisdicción ordinaria, o delitos comunes, que den como resultado un incremento en el patrimonio del actor de la conducta delictiva. De tal forma, esta omisión normativa podría estar en detrimento de los derechos de las víctimas, más no al desconocimiento, en este caso, como garantía del derecho a la reparación, de los delitos efectuados por miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.

Como se ha dicho, los preacuerdos y negociaciones no operan cuando se vulneran garantías y derechos del acusado o de las víctimas y además son improcedentes en lo relacionado al Artículo 199, numeral 7° de la Ley 1098 de

2006, situaciones que tendrá que observar el Fiscal Penal Militar al momento de decidir sobre la realización de un preacuerdo.

El artículo 492 del nuevo Código Penal Militar permite la realización de preacuerdos entre el Fiscal Militar y el acusado solamente a partir de la presentación del escrito de acusación; situación diferente en la Ley 906 de 2004, que si bien tiene en cuenta dicha posibilidad, también autoriza la realización de preacuerdos entre el Fiscal y el imputado desde la audiencia de imputación hasta antes de ser presentado el escrito de acusación.

En este aspecto, el control que se debe ejercer sobre los preacuerdos y negociaciones en la Justicia Penal Militar lo deberán hacer, en primera medida el Fiscal que realiza el preacuerdo, y posteriormente el Juez de conocimiento; es decir que el Juez de garantías no podrá ejercer ningún tipo de control a un preacuerdo o negociación, como sí lo puede hacer en la Justicia Ordinaria, teniendo en cuenta el momento procesal en el cual se puede realizar en la Justicia Penal Militar.

Otro momento en el que se puede realizar un preacuerdo, conforme a la Ley 1407 de 2010, se da desde el momento posterior a la realización de la audiencia de acusación y hasta el momento que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral. De esta forma, el nuevo Código Penal Militar también se asimila a la ley 906 de 2004. Al respecto, debe tenerse en cuenta que desde el mismo proyecto del Nuevo Código Penal Militar se establecieron los momentos en los que se deberían realizar los preacuerdos de la siguiente manera:

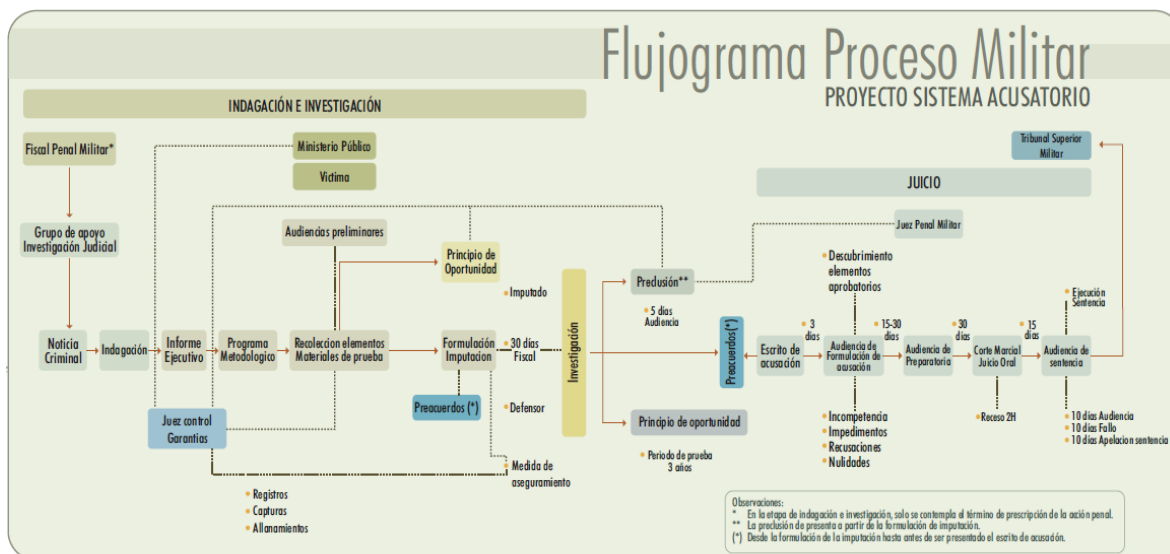


Figura 1. Flujo grama Proceso Militar.
Fuente: Dulce Pereira C.A. (2006). Justicia Penal Militar: hacia un sistema acusatorio. *Revista especializada de justicia penal militar*. (6), p. 10 – 11.

Entre las modalidades de preacuerdos y negociaciones que se incluyeron en el nuevo Código Penal Militar, no tiene cabida la opción de realizar preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias, como sí son tenidos en cuenta en la Ley 906 de 2004. Esto surge como consecuencia de la no inclusión de la posibilidad de realizar preacuerdos y negociaciones desde la audiencia de formulación de imputación, es decir, que el procesado en el nuevo Código Penal Militar tiene la posibilidad de realizar un preacuerdo con la Fiscalía Penal Militar solo cuando se conoce el escrito de acusación.

En el mismo artículo se adhiere un párrafo, que incluye en buena forma los beneficios por colaboración, que en la ley penal ordinaria tienen cabida desde 1990 como se especificó anteriormente. De tal manera, el Congreso de la República en el nuevo Código Penal Militar habla de una colaboración eficaz (Ley 1407 de 2010, Art. 493), es decir, que produzca resultados en forma rápida con el fin de evitar que se siga cometiendo un delito, que se efectúen nuevos delitos y que se desarticulen bandas de delincuencia organizada.

Se observa entonces, que en el nuevo Código Penal Militar, los preacuerdos y negociaciones se celebrarán entre la Fiscalía y el acusado, que de conformidad con Sintura (2004) es como se había concebido inicialmente en el anteproyecto de la Ley 906 de 2004, que preveía que los preacuerdos se celebrarían a partir de la formulación de la acusación y hasta antes de iniciación del juicio oral.

Por otro lado, la víctima también tiene el derecho de participar en el proceso penal militar, como sucede en el procedimiento ordinario, a la luz de lo expresado por Dulce Pereira (2006):

También interviene dentro del proceso penal militar la víctima del hecho punible, figura que se ha considerado a partir de la parte civil. La existencia de un derecho fundamental a la verdad, la justicia y la reparación implica la posibilidad que la víctima dentro del proceso penal pueda participar activamente, aún dentro de la investigación, gozando de las mismas facultades genéricas que tiene la defensa, tal y como lo señaló la Corte Constitucional en su sentencia C-905 de 2002 (p. 13).

De lo anterior se puede afirmar que es fundamental la participación de la víctima en el proceso penal militar como sucede en el procedimiento penal ordinario, pues se trata entonces de no vulnerar los derechos de las partes y la víctima, al entrar como parte civil en el proceso actúa como tal. Además, como se dijo, para la Corte Constitucional se trata de derechos fundamentales, que si bien no se entienden absolutos, en el proceso penal y los preacuerdos de que se trata no se pueden vulnerar. Se debe señalar por último que la víctima puede constituirse en parte civil dentro del proceso penal militar desde la indagación preliminar.

Es importante tener en cuenta que la parte procesal del nuevo Código Penal Militar no se está aplicando actualmente, de hecho solo se está aplicando la parte general, pues aún están en labores de implementación de la tecnología y recursos

necesarios. Por consiguiente, aún no se han aplicado los preacuerdos y negociaciones en la Justicia Penal Militar.

Para finalizar, en la Ley 1407 de 2010 se tiene en cuenta el beneficio por el hecho de la aceptación de cargos por parte del procesado en la misma forma que se encuentra estipulado en la Ley 906 de 2004. Lo mismo sucede en lo referente a las reglas comunes para los preacuerdos y negociaciones.

Conclusiones

Los preacuerdos y negociaciones, en el sentido del presente escrito, son una institución de derecho penal que, asimilándose un poco al negocio jurídico civil, es creada con el objeto de adquirir beneficios mutuos entre la Fiscalía y el procesado, siempre teniendo en cuenta los límites en cuanto a los derechos del procesado, los derechos de las víctimas y la misma ley procesal. De esta manera, los preacuerdos y negociaciones se encuentran en un grupo de instituciones jurídico penales que hacen parte de la terminación anticipada del proceso penal.

En el campo de los preacuerdos y negociaciones se puede verificar la existencia de tres clases a saber: los que afectan la existencia del cargo, los que afectan el contenido del cargo, los que se basan en la cooperación con la justicia y los preacuerdos cruzados; pero todos ellos se encuadran en las dos funciones básicas de los preacuerdos como lo son agilizar y hacer más eficaz el sistema penal y otorgar beneficios a los procesados sin vulnerar los derechos de las víctimas.

Entre los antecedentes de los preacuerdos y negociaciones se puede encontrar que en su momento, hasta antes de la consolidación de la Constitución Política de 1991, los preacuerdos y negociaciones no se tenían como una institución, pues en su nacimiento la figura era un poco difusa, pero que se puede enmarcar en el

otorgamiento de unos beneficios al procesado en razón a su colaboración efectiva con la justicia. Así, a esta figura difusa se le puede aplicar el siguiente silogismo: a mayor colaboración con la justicia, mayores beneficios para el procesado.

En 1993 cuando ya se ha consolidado palpablemente la Constitución de 1991, con la creación de la figura de sentencia anticipada, como el más cercano antecedente de los preacuerdos y negociaciones como institución penal, se iniciaba a petición del procesado, había un acuerdo entre la Fiscalía y el procesado y finalmente era remitida al juez competente, por un lado, para su control de legalidad, y por otro, para dictar la sentencia.

Con la tendencia a la implementación de procedimientos orales a nivel mundial, en Colombia se da inicio con dicha implementación a partir de la Ley 906 de 2004 que reemplazó a la Ley 600 de 2000 como Código de Procedimiento Penal dentro de la justicia penal ordinaria. En esta nueva etapa del derecho en Colombia se mantuvo la institución de los preacuerdos y negociaciones, pero sus finalidades cambiaron. Si bien, desde la Constitución Política de 1991 los preacuerdos y negociaciones se centraron en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, luego de la expedición de la Ley 906 de 2004 se habla que la institución propende por la humanización del derecho penal, a demás de brindarle eficiencia y eficacia a la administración de justicia.

En la aplicación de los preacuerdos y negociaciones se evidencian por sí mismos los principios rectores del nuevo sistema procesal penal establecidos en la ley 906 de 2004; de esta manera se pueden encontrar como principios aplicados a los preacuerdos y negociaciones el principio de oralidad, celeridad, contradicción, inmediación, concentración y eficacia.

Conforme a lo establecido en la ley 906 de 2004, se hace llamativo para quienes cometen delitos y están inmersos en un proceso penal, pues a sabiendas que pueden ser condenados por el total de los delitos cometidos, con sus respectivos

agravantes, tienen la facultad de dar inicio al trámite de los preacuerdos y negociaciones con la Fiscalía.

Hay dos momentos procesales en los que el procesado puede acudir a los preacuerdos y negociaciones, el primero conforme al artículo 350 del Código de Procedimiento Penal que va desde la formulación de la imputación hasta antes de presentarse el escrito de acusación; y el segundo conforme al artículo 352 que va desde la presentación del escrito de acusación hasta el momento en que sea interrogado en el juicio oral sobre la aceptación de responsabilidad.

En principio los preacuerdos y negociaciones se pueden realizar sobre todos los delitos tipificados en el Código Penal, pero sobre esta regla general hay excepciones que se pueden dividir en legales y a discreción de la Fiscalía General de la Nación. Son legales las que se encuentran expresamente dentro de la ley, como la improcedencia contenida en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, además, la que se encuentra en el artículo 199, numeral 7 del Código de la Infancia y la Adolescencia. La otra excepción se refiere a la facultad que tiene la Fiscalía General de la Nación para hacer que los preacuerdos y negociaciones sean improcedentes sobre ciertos delitos que son de gran trascendencia social como los delitos de lesa humanidad.

De igual forma, al realizar los preacuerdos y negociaciones, el Fiscal debe tener en cuenta principalmente dos factores: el primero, que no se vulneren los derechos y garantías fundamentales tanto del imputado o acusado como de las víctimas de la conducta punible; y el segundo, la obligación de seguir con la Directiva 001 de la Fiscalía General de la Nación sobre la realización de los preacuerdos y negociaciones donde impone unas directrices a seguir.

Dentro del derecho penal, un cambio trascendental surge a partir de la implementación de un sistema oral dentro de la Justicia Penal Militar, de esta manera se crea la ley 1407 de 2010, que venía como proyecto de ley desde el año

2005. En esta normativa, como un nuevo aspecto dentro de la justicia penal militar, se incluyen los preacuerdos y negociaciones entre el acusado y la Fiscalía Penal Militar.

Es de tener en cuenta, en este punto, que si bien en la Ley 522 de 1999 no se contemplaron los preacuerdos y negociaciones, parece bueno en gran medida su inclusión en la nueva normativa, al igual que la oralidad en el sistema, en tanto que lo vuelve ágil y eficaz.

En la inclusión de los preacuerdos y negociaciones dentro del Código Penal Militar, a demás de las reflexiones anteriores con respecto a los objetos y fines que persiguen, también hay que hacer algunas salvedades respecto de su comparación con la ley 906 de 2004. Si bien, la institución de los preacuerdos y negociaciones se asimila de forma general en los dos códigos analizados, trae consigo ciertas diferencias substanciales en el desarrollo del proceso penal militar.

Los momentos en los que el procesado puede acudir a los preacuerdos y negociaciones son dos: el primero, conforme al artículo 492, desde la presentación del escrito de acusación hasta el inicio de la audiencia de acusación; y segundo, conforme al artículo 495, después de celebrada la audiencia de acusación y hasta el momento en que sea interrogado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de responsabilidad.

En este sentido se denota una variación en comparación con la Justicia Ordinara, pues en la Justicia Penal Militar no existe la posibilidad de realizar preacuerdos y negociaciones antes de la presentación del escrito de acusación, como sí se tiene en cuenta en la Justicia Ordinaria. Esto implica que los jueces de garantías dentro de la Justicia Penal Militar no conocen ni ejercen ningún tipo de control de legalidad de los preacuerdos y negociaciones como sí sucede en la Justicia Ordinaria.

La celebración de preacuerdos y negociaciones será improcedente en la Justicia Penal Militar en los términos del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia si llegara a suceder, teniendo en cuenta el sustento que tiene los derechos de los menores en la Constitución y los Tratados Internacionales. Por el contrario, no es improcedente la realización de los preacuerdos en la situación descrita por el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, pues al omitirlo en la normativa penal lo está excluyendo.

El Fiscal Penal Militar deberá velar por que no se vulneren los derechos y garantías fundamentales tanto del acusado como de las víctimas a partir del debido proceso.

Las víctimas en el proceso penal militar tendrán las mismas prerrogativas que en la Justicia Ordinaria, es decir, su derecho a estar presente y ser oídos en la audiencia que se lleve a cabo el preacuerdo, posteriormente aceptar el preacuerdo y en caso que no esté conforme con el preacuerdo logrado, tendrá los debidos recursos legales.

Referencias Bibliográficas

- Alegría Patow, J. [et al] (2012). *El proceso de terminación anticipada en el Perú*. (Tesis Doctoral). Universidad de San Martín de Porres. Perú. Disponible en: <http://www.derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/investigaciones-doctorales/la-terminacion-anticipada-en-el-peru.pdf>
- Avella Franco, P.O. (2007). *Estructura del Proceso penal Acusatorio*. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional.
- Asamblea Nacional Constituyente. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Segunda edición corregida. Gaceta Constitucional N° 116 de 1991.
- Bazzani Montoya, D. (2005). La terminación anticipada del proceso penal por consenso y el principio de oportunidad. En Consejo Superior de la Judicatura. *Reflexiones sobre el nuevo sistema procesal penal: los grandes desafíos del juez penal colombiano*. (p. 215 – 282). Bogotá D.C.: Consejo Superior de la Judicatura.
- Bazzani Montoya, D. (2009, Jul. - Dic.). Poderes de control del juez en la terminación anticipada del proceso por acuerdo y aceptación de cargos. *Derecho penal y criminología*. 30 (89), p. 147 – 162.
- Bernal Cuellar, J. & Montealegre Lynett, E. (2013b). *El proceso penal: fundamentos constitucionales y teoría general*. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.

Bernal Cuellar, J. & Montealegre Lynett, E. (2013a). *El proceso penal: estructura y garantías procesales*. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.

Camelo Piñeros, J.A. (2005). La nueva justicia militar y las garantías procesales en el proceso penal militar. *Revista especializada de justicia penal militar*. (5), p. 22 – 26.

Congreso de la República de Colombia. (1986). *Ley 30 de 1986*. Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones. *Diario Oficial*, enero 31 de 1986.

Congreso de la República de Colombia. (1993). *Ley 81 de 1993*. Por la cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal. *Diario Oficial* N° 41.098.

Congreso de la República de Colombia. (2000). *Ley 600 de 2000*. Por la cual se expide el código de procedimiento penal. *Diario Oficial* N° 44.097.

Congreso de la República de Colombia. (2004). *Ley 906 de 2004*. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. *Diario Oficial* N° 45.657.

Congreso de la República de Colombia. (2006). *Ley 1098 de 2006*. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. *Diario Oficial* N° 46.446.

Congreso de la República de Colombia. (2010). *Ley 1407 de 2010*. Por la cual se expide el Código Penal Militar. *Diario Oficial* N° 47.804.

Cornejo, G. (Enero, 2006). El Plea bargaining. *Revista Iberoamericana de Arbitraje y Mediación* - *SERVILEX*. Disponible en: <http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/barganing.php>

Corte Constitucional de Colombia. (1995). *Sentencia C- 141 de 1995*. MP: Antonio Barrera Carbonell. Expediente D- 701.

Corte Constitucional de Colombia. (2005). *Sentencia C-1195 de 2005*. MP: Jaime Araujo Rentarías.

Corte Constitucional de Colombia. (2005). *Sentencia C-1260 de 2005*. MP: Clara Inés Vargas Hernández. Expediente D- 5731.

Corte Constitucional de Colombia. (2006). *Sentencia T- 966 de 2006*. MP: Clara Inés Vargas Hernández. Expedientes acumulados: T-1352006, T-1352007, T-1352759, T-1352848 y T-1364833.

Corte Constitucional de Colombia. (2007). *Sentencia C- 516 de 2007*. MP. Jaime Córdoba Triviño. Expediente: D- 6554.

Corte Constitucional de Colombia. (2010). *Sentencia C- 059 de 2010*. MP. Humberto Antonio Sierra Porto. Expediente: D- 7844.

Corte Constitucional de Colombia. (2011). *Sentencia C- 260 de 2011*. MP. Jorge Iván Palacio. Expediente: D- 8269.

Corte Constitucional de Colombia. (2011). *Sentencia C- 651 de 2011*. MP. María Victoria Calle Correa. Expediente: D- 8412.

Corte Suprema de Justicia - Colombia. (2005). Sala de Casación Penal. *Sentencia agosto 23 de 2005*. MP: Jorge Luis Quintero Milanés. Proceso No. 21954. Acta No. 063.

Corte Suprema de Justicia - Colombia. (2005). Sala de Casación Penal. *Sentencia diciembre 14 de 2005*. MP: Yesid Ramírez Bastidas. Proceso No. 21347. Acta No. 100.

Corte Suprema de Justicia - Colombia. (2009). Sala de Casación Penal. *Sentencia del 8 de julio de 2009*. MP: Julio Enrique Socha Salamanca. Radicado 31280, Acta No. 209.

Consejo Superior de la Judicatura. (2004, Febrero). *Atraso judicial en Colombia: realidades y soluciones*.

Consejo Superior de la Judicatura & Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. (2009). *Preacuerdos y Negociaciones en el Proceso Penal Acusatorio Colombiano*. 2009. Disponible en:
http://www.ejrlb.net/medios/docs/113/223_01_Preacuerdos_y_Negociaciones.pdf

Defensoría del Pueblo (s.f.). *Preacuerdos y Negociaciones*. Plan Nacional de Capacitación. Módulo 6 Salidas Alternas y Derecho de Defensa. [Online] Recuperado de:
http://biblioteca.ucn.edu.co/repositorio/Especializaciones/EspDerechoProbatorio/prueba_anticipada/documentos/DOCUMENTO_5.pdf

Dulce Pereira C.A. (2006). Justicia Penal Militar: hacia un sistema acusatorio. *Revista especializada de justicia penal militar*. (6), p. 8 – 14.

Durán Ariza, E. (2009 – Abril). Preacuerdos celebrados entre la fiscalía y el procesado. *Facetas Penales*. (79), 135 – 137.

Espitia Garzón, F. (2011). *Instituciones de derecho procesal penal*. Bogotá D.C.: Editorial Leyer.

Gilles Bélanger, P. (2010, Jul – Dic). Algunos apuntes sobre las razones de la reforma del procedimiento penal en América Latina. *Prolegómenos: Derechos y Valores*. XIII (26), p. 59 – 78.

Garzón Marín, A., Londoño Ayala, C. A., & Martínez, G. C. (2007). *Negociaciones y Preacuerdos*. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica.

Gómez Pavajeau, C.A (2010, Septiembre). *Preacuerdos y Negociaciones de culpabilidad*. Consejo Superior de la Judicatura. Bogotá.

Márquez Cárdenas, A. E. (2009, Ene – Jun). Facultades de las víctimas como sujetos procesales en el sistema acusatorio de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. *Prolegómenos: derechos y valores*. XII (23), p. 21 – 33.

Matyas Camargo, E. (2012, Ene – Jun). Los derechos de las víctimas en el proceso penal colombiano. *Revista republicana*. (12), 17 – 42.

Ministerio de Justicia y del Derecho – Colombia. (1990). *Decreto 3030 de 1990*. Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público y se subrogan los decretos 2047, 2147 y 2372 de 1990. Diario Oficial N° 39.603.

Montero Aroca, J. (1994). La garantía procesal penal y el principio acusatorio. *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*. (1), 973 – 984.

Presidencia de la República de Colombia. (1987). *Decreto 1199 de 1897*. Por medio del cual se dictan medidas tendientes a combatir la impunidad. Diario Oficial N° 37.943.

Presidencia de la República de Colombia. (1988). *Decreto 2490 de 1988*. Por el cual se adicionan los Decretos Legislativos 0180 y 0474 de 1988. Diario Oficial N° 38.594.

Presidencia de la República de Colombia. (1990). *Decreto 2047 de 1990*. Por el cual se crean mecanismos para incentivar el sometimiento a la justicia de quienes hayan cometido delitos relacionados con los motivos de perturbación del orden público. Diario Oficial N° 39.521.

Presidencia de la República de Colombia. (1991). *Decreto 2700 de 1991*. Por medio del cual se expiden y se reforman las normas de procedimiento penal. Diario Oficial N° 40.190.

Puentes Torres, L.F. (2006). Una reforma que revitalice a la justicia penal militar. *Revista especializada de justicia penal militar*. (6), 6 – 7.

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (DRAE), edición 22^a. Disponible en: <http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>

Riveros Barragán, J. D. (2008, Julio - Diciembre). Reflexiones teóricas y prácticas sobre los acuerdos de culpabilidad y el principio de oportunidad en la ley 906 de 2004. En *Universitas*. (116), 173 – 200.

Sintura Varela F. J. (2004, Octubre- Diciembre). Preacuerdos y Negociaciones entre la Fiscalía y el Imputado o acusado. *Revista Internacional Derecho Penal Contemporáneo*. (9), 85 – 108.

Tello Sánchez, J.M. (2008, Septiembre). Los preacuerdos en el proceso penal. *Facetas Penales*. (72), 99 – 100.

USAID. (2003, Septiembre). *Técnicas del Juicio Oral en el Sistema Penal Colombiano*. Lecturas Complementarias. Bogotá D.C.: Quebecor S.A.

USAID. (2009, Marzo). *Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano*. Manual General para Operadores Jurídicos. Bogotá, Segunda Edición: D'Vinni S.A.